

GOBERNAR EL MUNDO A TRAVÉS DE INTERNET

Aun los más entusiastas profetas de la «globalización» se sienten preocupados por sus contradicciones y por cómo controlarlas. Sus críticos no tienen dudas, y pretenden combatir tanto éstas como aquélla. Frederic Jameson espera con ansiedad una solidaridad opositora transnacional, mientras que Daniele Archibugi aspira a una democracia transnacional¹. Jameson se confiesa utópico, y Archibugi, más práctico, considera que una nueva política tendrá que construirse a partir de la antigua.

Puede que carezca de importancia que los problemas que detecta en la nueva «globalización» no sean tan nuevos. Ninguno de los que menciona ha sido provocado por la desaparición de los controles sobre los mercados monetarios y de capital ni de las restricciones al comercio internacional, ni tampoco por la facilidad de comunicación y la explosión de información y desinformación, ni siquiera por la disolución de los gustos locales que caracteriza tan claramente el pasado más reciente. Algunos Estados, dice, afrontan más exigencias que nunca; algunos se ven confrontados incluso a la posibilidad de una secesión. Muchos crean problemas que no parecen dispuestos a solventar ni aun a tomar en consideración. Otros tienen que adoptar decisiones acerca de los términos de intercambio comercial con otros Estados, por ejemplo, o sobre drogas, inmigración, etc., que no pueden regular por sí solos. Y existen también intereses transnacionales «muy alejados de cualquier mandato popular». Pero la gente ha venido protestando contra el poder desde que éste existe. La cristalización, en la Europa del siglo xvii, del concepto de soberanía estatal, y su extensión al resto del mundo, sólo han servido para dar a esas protestas un filo más acusado. Durante quinientos años los imperialismos europeos han creado crisis de subsistencia, padecimiento e intolerancia mucho peores que la de los últimos cuarenta. Las grandes hambrunas son ahora poco frecuentes; los genocidios no son sino una sombra de los perpetrados en el pasado; ya no se producen grandes migraciones; y los poderes transnacionales que no

¹ Frederic JAMESON, «Globalización y estrategia política», y Daniele ARCHIBUGI, «Democracia cosmopolítica», NLR 5, Madrid, noviembre-diciembre de 2000.

tienen que rendir cuentas a nadie, desde la Iglesia Romana hasta el capital financiero, no son un fenómeno reciente.

En cualquier caso, se aprecia un entusiasmo renovado por lo que los liberales acostumbraban a llamar «gobierno mundial». Como entonces, se ha suscitado tras la guerra. Brotó llameante en las charlas autocomplacientes de Washington, a comienzos de la década de 1990, acerca de un «Nuevo Orden Mundial», de los «dividendos» de la paz, y aún sigue dando que hablar. Sin embargo, se trata de un tema antiguo: Archibugi menciona como precursora la *ewige Frieden* [paz perpetua] de Kant. Aunque sus premisas son similares, deducen políticas diferentes. «La democracia cosmopolítica se basa en el supuesto de que una serie de objetivos importantes –control del uso de la fuerza, respeto por los derechos humanos, autodeterminación de los pueblos– sólo se obtendrán mediante la extensión y desarrollo de la democracia». Pero no alcanza a ser convincente, por más que se nos presente en compañía tan distinguida; al fin y al cabo, tampoco Kant se mostraba convincente.

Liberales y demócratas

Archibugi no hace tabla rasa de los Estados, que son los poderes últimos, con capacidad de coerción. Pero Kant no habría sido el único en 1795, ni lo sería ahora, en reprenderle por sugerir que «el uso arbitrario de la fuerza por parte del gobierno está sometido ahora a los controles y equilibrios de una comunidad política más amplia» de ciudadanos. Existe una diferencia entre los «controles y equilibrios» de tipo constitucional y los que los ciudadanos pueden imponer intermitentemente con su voto. Los constitucionalistas no siempre han desconfiado del poder estatal. Los no-liberales, tanto en Francia como en Japón o en cualquier otro lugar durante el siglo XIX, como en gran parte de América Latina y Asia en el XX, o algunos ya en el XXI, han querido concentrarlo («el Estado acabará por hundirse –decía uno de los arquitectos de la constitución Meiji en la década de 1880– si se confía la política a las irreflexivas discusiones del pueblo»). Los más liberales han pretendido descentralizarlo, aunque las constituciones que han preconizado han sido a menudo inoperantes. Los demócratas, por el contrario, como vieron claramente algunos de los contemporáneos republicanos de Kant, entre los que se podría citar a Madison, puede que no siempre hablen del poder pero están convencidos de que hay que hacerse con él. El Estado debería ser el instrumento del pueblo. Archibugi es un demócrata, moralmente liberal, pero no tanto constitucionalmente. Para él los controles y equilibrios residen en la «presión de los ciudadanos», que convierte «una herramienta de dominación en un instrumento de servicio».

Cabe no obstante disentir de esa tesis. La cuestión central es que la política de los Estados liberal-democráticos modernos, así como la de los Estados en que los demócratas liberales combaten a los de otras tendencias, ha sido y continúa siendo un campo de batalla entre quienes ejercen

el poder, quienes pretenden limitar ese poder, y quienes desean el poder para sí mismos. La diferencia importante, insistiría Archibugi, es la que se da entre los Estados en los que el pueblo, como suele decirse, es «soberano», y aquéllos en los que no lo es. Pero de eso no se colige, como él sugiere, que todo lo bueno de los Estados modernos venga de la «comunidad política más amplia» de ciudadanos y que el mejor Estado sea aquél en que gobierna esa comunidad. El propio argumento de Kant en 1795 contra la democracia, hay que reconocerlo, se debía más al miedo y los prejuicios que a la razón, y era obviamente inconsistente (resulta un testimonio revelador del poder del fervor sobre la inteligencia que tanta gente haya considerado durante tanto tiempo *Der ewige Frieden* como una obra grandiosa). Una democracia, sostenía Kant, es necesariamente despótica, «porque establece un poder ejecutivo mediante el cual todos los ciudadanos pueden adoptar decisiones acerca de (y a menudo contra) cada individuo sin su consentimiento, siendo esas decisiones tomadas por la mayoría del pueblo, pero no por todo el pueblo, lo que significa que la voluntad general está en contradicción consigo misma, y también, por lo tanto, con la libertad»². Estaba convencido de que existe una voluntad general pero retrocedía ante la idea de un poder ejecutivo popular capaz de decidir cuál es esa voluntad popular. Actualmente casi todo el mundo aceptaría que ningún ejecutivo puede gozar de un poder irrestricto. Sólo quienes estén seguros, como Kant lo estaba en teoría, aunque no de hecho, de que «el pueblo» siempre tiene razón, podrían estar en desacuerdo con esto.

¿Partidos globales?

Lo que distingue la «democracia cosmopolítica» de otros proyectos de gobierno mundial, según Archibugi, incluida la federación de repúblicas que el propio Kant preconizaba y que Archibugi malinterpreta (Kant no pretendía, como él dice, que ésta constituyese un Estado internacional denominado con otro nombre, sino lo contrario), «es el intento de crear instituciones que posibiliten que se oiga la voz de los ciudadanos en los asuntos globales, sea cual sea su eco en el país al que pertenezcan». Quienes representan al «pueblo» en los gobiernos supuestamente representativos de las repúblicas existentes no son ni siquiera parte de la solución. Adictos como son al engaño, a los agentes secretos y a las consultas a puerta cerrada, constituyen una parte sustancial del problema. La solución de Archibugi es una «serie paralela –paralela, dice al comienzo de una argumentación movediza, no de rango superior– de instituciones democráticas a escala global, a fin de implicar a los ciudadanos del mundo en la toma de decisiones» en cuestiones de importancia internacional, «sea cual fuere el papel político que se les permite desempeñar dentro de sus propios países».

² Immanuel KANT, *La paz perpetua*, Madrid, Tecnos, 1985.

Planteadas así, su propuesta difiere bien poco de otras que se han venido haciendo desde el final de la Guerra Fría. En 1995, la Comisión sobre Gobierno Global, heredera de la Comisión Independiente sobre Desarme y Seguridad del que fuera primer Ministro sueco Olof Palme, la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de la ex primera Ministra noruega Gro Harlem Brundtland [actual Directora General de la OMS], y la Comisión del Sur del recientemente fallecido ex presidente de Tanzania Julius Nyerere, llegaron a recomendar una «asamblea popular» como complemento de la Asamblea General de Naciones Unidas. En su inicio se trataría de una asamblea de parlamentarios, miembros de las asambleas nacionales de los Estados miembros de la ONU, que podrían llegar a ser elegidos directamente por «el pueblo» en esos países. Entretanto, sugería la Comisión, sería algo así como «un foro de la sociedad civil» que reuniría a representantes de varios cientos de organizaciones no gubernamentales interesadas en cuestiones «globales». Archibugi se muestra más decidido, y quiere una asamblea de representantes elegidos por el pueblo de entre varios partidos internacionales. Como a Ulrich Beck, le parece «sorprendente que los partidos políticos se vean confinados casi exclusivamente al nivel nacional».

Lo que parece realmente sorprendente es que tome al partido político moderno como modelo para una política en la que se puedan oír «las voces de los individuos». Los partidos son organizaciones de poder, la maquinaria con la que los políticos profesionales de las democracias representativas controlan la admisión en sus filas, compiten por los votos y consiguen apoyo en su favor. Esas máquinas no pueden hacer lo que tienen que hacer sin disciplina, y la disciplina que imponen, como señalaron los observadores desilusionados del SPD alemán hace cien años, subvierte casi del todo su finalidad representativa. Nadie puede en la actualidad esperar confiadamente que mediante los partidos de los políticos profesionales, y en las asambleas en las que esos partidos se enfrentan, se oigan «las voces de los individuos».

Pedir y conceder

Sin embargo, lo que distingue más decisivamente la propuesta de Archibugi es su opinión acerca de quién podría escuchar esas voces y por qué. La Comisión sobre Gobierno Global no ha propuesto que ninguno de esos organismos que describía tuviera ningún poder. Simplemente deliberarían sobre la agenda de lo que la Comisión esperaba que fuera una Asamblea General de Naciones Unidas «revitalizada» y transmitirían sus opiniones. Archibugi pretende ir mucho más lejos. De hecho, parece querer ir hasta el final. Quiere que su asamblea pueda «encargar a estructuras desprovistas de poderes coercitivos (organismos judiciales internacionales, instituciones ciudadanas mundiales) la tarea de establecer cuándo se debe emplear la fuerza, pidiendo a los Estados, que monopolizan los medios del poder militar, que se sometan a su decisión». Evidentemente, todo depen-

de de qué quiera decir «pidiendo». Cualquiera puede pedir. Pero frente al vicio de pedir, dice el proverbio, está la virtud de no dar. Para que la asamblea de Archibugi fuera algo más que un ágora de hermosas divagaciones debería poseer la capacidad de ordenar y de poner en práctica lo que ordena. Debería contar con armas con las que poder amenazar convincentemente y derrotar a quienes se opusieran a ella. Esto significaría, dada la dificultad no mencionada por Archibugi de autofinanciarse –los gobiernos no van a contribuir graciosamente a su superación–, que debería probablemente contar con armas nucleares. Sólo entonces «aspectos fundamentales» de nuestra experiencia de los parlamentos nacionales, en palabras de Archibugi, «como el principio mayoritario, la formulación de normas o el uso del poder coactivo», esto es, la propia soberanía de los Estados, «tendrán», como desea, «que reformularse».

Si alguna transformación extraordinaria, que Archibugi prudentemente no explicita, lograra esa reformulación y nos encontráramos de pronto con esa autoridad, el resultado sería lo que para el liberal Kant, por no hablar de quienes vivimos en un mundo nuclearizado, constituiría la pesadilla suprema: el legislativo y el ejecutivo confundidos en un solo poder, dirigido por facciones de políticos profesionalizados en beneficio de su propia promoción, dirigiendo lo que sería, aparte del nombre, un Estado mundial contra el que en principio no existiría ninguna otra autoridad compensatoria. Para que un Estado de ese tipo encarnara la «tolerancia, legitimidad y eficacia» que Archibugi, como cualquier persona de moralidad sencilla, desearía, esas cualidades sólo podrían descansar en la vana esperanza de Kant, filósofo del Derecho, que en el atormentado curso de la *ewige Frieden* perdió la batalla frente al Kant político práctico: que los partidos de la asamblea estuvieran compuestos únicamente por políticos cosmopolitas absolutamente virtuosos, expresando como ventrílocuos las opiniones y deseos de «pueblos» absolutamente virtuosos. Esa imagen, si no fuera tan absurda, sería realmente espantosa. Mejor haríamos en concebir algo distinto.

Estatalidad desigual

Lo verdaderamente nuevo en el presente es que vemos y oímos mucho más acerca de lo que nos pasa que antes, y que ese «nos» ocupa una posición un tanto distorsionada. Lo que también es nuevo, como reconoce Archibugi, es la lista ampliada de organismos internacionales a los que pertenecen los Estados, y el número mucho mayor de organizaciones que presionan sobre esos organismos en defensa de intereses particulares. Los primeros se han más que decuplicado en los últimos treinta años, y las segundas aún más espectacularmente. En esto hay efectivamente algo más «global» que antes. Mucha más gente conoce las cuestiones de política internacional, sobre la que se ejercen ahora nuevas presiones, tanto por parte de los Estados como de quienes desean influir sobre ellos. Aun así, las cuestiones en sí mismas no son muy diferentes de las que han aparecido desde finales de la Primera Guerra Mundial, y la «democracia», tal como la piensa Archibugi, no tiene

prácticamente nada que decir ante las tres más fundamentales: la autoridad de los Estados, la regulación de las relaciones entre ellos y las formas en que se podría empujar a los gobiernos a hacer más (y menos) de lo que hacen. En realidad, en sus críticas a quienes creen en la «paz democrática», casi concede tanto a su posición como intenta criticar la misma.

Los Estados siguen dirigiendo el mundo. «Nunca en la historia de la raza humana –afirma Archibugi– ha existido una estructura con tanto éxito». Quizá sea así; pero los éxitos de los Estados modernos son muy dispares. Muchos no son siquiera capaces de ejercer el control sobre su territorio ni de garantizar la seguridad elemental de sus ciudadanos. Algunos, en particular en el África subsahariana, no lo han conseguido nunca (esto no siempre es de lamentar; la actuación de los Estados ha sido con frecuencia voluble, codiciosa y violenta. Sus desestatalizados ciudadanos, aliviados de sus exacciones, pueden llegar a considerarse más seguros y más afortunados sin ellos). Algunos Estados, por ejemplo en partes de la antigua Unión Soviética, así como en América Central y del Sur, han perdido la autoridad que una vez tuvieron. En unos pocos, como Colombia, la estatalidad se ha deshilachado casi totalmente. Muchos Estados siguen luchando por lo que consideran que son sus derechos, combatiendo contra grupos de bandidos armados y escuadrones de la muerte salidos de sus propias filas, grupos que dicen defender un interés civil pero cuyas acciones resultan devastadoras para cuantos se hallan en la línea de fuego cruzado, y por supuesto permanentemente destructivas. Los Estados o sus agentes han actuado de este modo en las últimas décadas en Sudán, Ruanda, Congo, Liberia, Sierra Leona, Zimbabue, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Rusia, el Cáucaso, Asia Central, Afganistán, Pakistán, India, Sri Lanka, Birmania, Irlanda del Norte, Croacia o Turquía. En algunos de esos países todavía siguen haciéndolo.

No es preciso calificarse de «humanitario» para entender que la ausencia de estabilidad y su violenta y rapaz presencia son las cuestiones políticas más fundamentales. El humanitarismo, de hecho, puede llevar a error. La gente humanitaria, como observó Carl Schmitt a finales de la década de 1920, tiende a ser liberal, y los liberales evitan hablar del poder. En su lugar hablan de ética y economía, polaridad de la que «pretenden eliminar la política como un terreno para conquistar el poder y reprimir». Convierten el Estado «en sociedad: su aspecto ético-intelectual en una concepción ideológica humanitaria de la humanidad, y el resto en un sistema económico-técnico de producción e intercambio». A partir de ahí argumentan que lo que necesita cualquier país es un mínimo de democracia liberal y de mercados liberales, olvidando que la confrontación política pacífica y los intercambios regulados sólo pueden florecer, o al menos funcionar, allí donde está presente la autoridad del Estado y la seguridad que éste proporciona. Eso les lleva a proclamar, en nombre de la «humanidad», el derecho a imponer por

³ Para un informe exhaustivo, véase «Liberalism since the Cold War: an Enemy to Itself?», en Michael COX, Ken BOOTH y Tim DUNNE (eds.), *The Interregnum: Controversies in World Politics, 1989-99*, Cambridge, 1999, pp. 145-160.

la fuerza esa autoridad con métodos que subvierten ese concepto y el liberalismo en que se amparan. Así se constata en Haití, Somalia, Iraq, y con mayor evidencia aún en la descarada intervención en Kosovo³.

Resulta fácil decir, y así lo hace Archibugi aun mostrándose en otros aspectos próximo a la descripción que hace Schmitt de los liberales, que los Estados no se pueden mejorar mediante intervenciones de ese tipo. Pero es mucho más difícil decir cómo podría ser de otra forma. Incluso si se deja a un lado la *Realpolitik* que tiende a justificar esa intervención; aun si se ignora la despreocupación con la que el poder, investido de moralidad, acostumbra a hacer caso omiso de la soberanía jurídica y la ley internacional, y se inquiere cómo se pueden configurar y reconfigurar los Estados, no hay respuesta segura. Los agentes independientes pueden lanzar ultimátums, enviar tropas, arrojar bombas, apuntar con armas inteligentes, imponer sanciones, e incluso intentar pacientemente –como lo intentó en 1993, en Camboya, la Autoridad Transitoria de Naciones Unidas– persuadir a las partes en litigio de que compartan el poder. Pero todo parece fracasar. Las fuerzas de intervención se ven obligadas a partir y cuando lo hacen se reinicia el combate. Archibugi ni siquiera puede convencerse a sí mismo de que un Estado mundial popular –que ofrezca «una perspectiva de desarrollo basado en la integración social y económica, que prive a los belicistas de armas y apoyo mercenario», que pida educadamente a los pueblos en cuestión que se alcen contra los dictadores que hablen «de limpieza étnica o de anexionarse otros países», y que cuente, además, con ayuda de un «gran número de “cascos azules” en el teatro de operaciones acompañados por abundantes representantes de la sociedad civil y militantes pacifistas»–, podría efectivamente hacer lo que quisiera. La «gobernación» eficaz y moralmente aceptable, limpia de las desagradables impurezas del «gobierno», ha sido deseada por la mayoría de la gente bienintencionada en la pasada década, pero desde el fin del imperio nadie ha sabido cómo asegurar su condición más básica en un país distinto del propio. Todos los pensadores específicamente políticos desde Tucídides han sabido que la cuestión decisiva es el poder, y que ninguna otra cosa prevalece ante él.

Nuevos actores

Nada de cuanto llevamos dicho implica que estemos obligados a dejar las cosas tal como están. Hay muchas cuestiones en el mundo, incluyendo la autoridad de Estados concretos, que son asunto de todos. Frente a esas cuestiones vale la pena seguir construyendo lo que en la eufemística jerga de la llamada «comunidad internacional» se denominan «instituciones multilaterales», lugares en los que los gobiernos pueden hablar en lugar de guerrear y perfeccionar la ley internacional. Siendo el poder lo que es, por supuesto, los Estados más poderosos siempre tendrán en esas instituciones más peso que los demás. Insistirán en los fines y cuando les convenga serán selectivos en cuanto a los medios. Pero ningún Estado, ni siquiera Estados Unidos, es capaz actualmente de llevar a la práctica tanto como desearía, sin correr el riesgo de provocar un estropicio. Cada uno de ellos

tiene que persuadir a los demás de que les interesa actuar junto a él. Los tribunales internacionales de justicia, pese a que Archibugi no lo deje claro, no son proclives, al menos abiertamente, a la negociación política y tampoco son, por cierto, instituciones democráticas. Pero pueden hacer lo que las asociaciones de Estados, más abiertamente políticas, no pueden, esto es, gobernar sobre los poderes de los Estados en cuanto tales. Algunas de sus decisiones, como la del Tribunal Internacional de Justicia a favor de Nicaragua y contra Estados Unidos en la década de 1980, no serán sino papel mojado. Pero si esos tribunales pueden adoptar decisiones como la que los Lores tomaron finalmente en Londres contra Pinochet, darán confianza a otros tribunales, como ha sucedido en este caso con los chilenos, y quizá tengan un efecto más amplio⁴.

Abandonadas a sí mismas, por supuesto, las «instituciones multilaterales» y los tribunales internacionales harán menos de lo que muchos desearían. Los delegados de los Estados en esas instituciones responderán más diligentemente a los demás delegados, o a intereses más poderosos en sus propios países, que a las presiones populares. Los tribunales serán conservadores a menos que se les empuje ejerciendo poder sobre ellos y mediante una fuerte opinión en contra. Pero incluso si surgiera el tipo de presión organizada que Archibugi preconiza, no es muy probable que fuera eficaz. Y en tanto no lo sea, en tanto coexista «en paralelo» con los Estados, no es probable que se considere «legítima», salvo en un sentido muy tenue. Pero las presiones desde abajo, o desde fuera, tienen importancia. Uno de los cambios más notables en la pauta seguida por la política internacional en los últimos treinta años ha sido la intrusión de organizaciones completamente al margen de los gobiernos. Alentadas en la década de 1980 por una Organización de Naciones Unidas que no tenía nada que ofrecer a un mundo endeudado y por un Banco Mundial que había llegado a desilusionar a los Estados y estaba perdiendo clientela frente al nuevo entusiasmo del dinero por los «mercados emergentes», algunas de esas ONG –Amnistía Internacional mediante su publicidad, Oxfam Internacional mediante sus *lobbies*, Greenpeace y Médicos Sin Fronteras por sus acciones– se han convertido en influyentes fuentes de información (y a menudo de desinformación maliciosa), opinión y presión. Pero eso no se ha debido a que representaran con perseverancia a un amplio abanico de intereses, o por rendir cuentas ante uno u otro tipo de votantes, o porque fueran particularmente tolerantes. Por el contrario, se han mostrado tozudas, agresivas y oportunistas en su uso de la publicidad, sin rendir cuentas más que ante sí mismas y quienes decidían financiarlas. Podríamos alegrarnos de verlas aprovecharse de los cosmopolitas que las consideran algo así como el núcleo de una nueva «sociedad civil», rebosantes de virtud e independientes del poder. Pero no son especialmente más virtuosas que cualquier otra organización política, y ese es su mérito. Simplemente movilizan los poderes que pueden para obligar a los gobiernos a hacer más de lo que harían sin esa presión. Hacen política.

⁴ He escrito sobre este asunto en «Pinochet: the Politics», *International Affairs*, 75, 1999, pp. 253-258.

Archibugi podría replicar que una política internacional de ese tipo servirá de poco para hacer avanzar las «nobles tareas» planteadas por la Sociedad de Naciones y la ONU. «Diplomáticos astutos y agentes secretos» (y actualmente las ONG y otros grupos de intereses particulares en la nueva «sociedad civil internacional») seguirán usurpando lo que él considera «funciones de los representantes electos» y el poder judicial seguirá «eclipsado por la intimidación o las represalias». «Amenazas, guerras, acuerdos y diplomacia» seguirán siendo la regla. Pero no se debería olvidar que es en el país donde la política exterior ha estado más sometida a la opinión pública en los últimos ochenta años, en Estados Unidos, donde los representantes electos se negaron a unirse a la Sociedad de Naciones y se han opuesto tenazmente a satisfacer las obligaciones financieras de su gobierno hacia la ONU. Allí, como en otros lugares, insistirá Archibugi, la opinión del «pueblo» puede cambiar. Por supuesto. Pero incluso si cambia, no podrá expresarse del modo que él imagina. Ya que el pueblo no puede negociar *en masse*, y tendrá que elegir delegados para hacerlo por él. Esos delegados, para tener éxito, deberán ejercitarse en las artes de Maquiavelo. Para practicar esas artes tendrán que recurrir a congresos, reglas, procedimientos, llamémoslo instituciones, y recintos cerrados en los que hacerlo. Y sin embargo Archibugi, cometiendo una equivocación en la que ya incurrió Kant, acepta que ése sería todavía un mundo de Estados.

En el actual período de «liberalización» económica y política, los gobiernos nominalmente democráticos de los Estados con más éxito tratan de persuadir a sus propios ciudadanos, así como a los gobiernos y ciudadanos de otros Estados más débiles, de que deben esperar menos que antes de la política. Les gustaría más que nada que los gobernados acudieran pacíficamente a su trabajo y regresaran satisfechos a su hogar, para comprar desde allí cosas apretando un botón e indicar su aprobación con otro. El final de la Historia, creen, es un sino fatal que todos deberíamos estar dispuestos a aceptar con alegría. Archibugi tiene toda la razón al rechazar esa perspectiva. No necesitamos menos política, sino más. Él y quienes argumentan como él simplemente se equivocan al concebir cómo puede ser tal política.